



Los participantes (de izquierda a derecha): José Andrés Murillo, Cristián Larroulet, Pablo González, Mariana Aylwin, Benito Baranda, Marcela Marzolo, Mario Waissblith, Harald Beyer, Paula Bedregal y Felipe Berrios.



CHLOE GARDNER

Más de 40 personalidades de distintos ámbitos suscribieron carta pública:

Referente transversal llama a impulsar con urgencia estrategia de infancia a largo plazo

GABRIEL PANDO

Decidieron unirse. No importaban las diferencias políticas o ideológicas, sino poner el acento en que el problema de la infancia en Chile es grave.

Por eso, más de 40 profesionales, académicos y políticos de distintos ámbitos suscribieron una carta, publicada el domingo pasado en "El Mercurio", en la que señalan que "en Chile se está vulnerando los derechos de muchos niños, niñas y adolescentes. La razón es simple: A pesar de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, nuestras políticas de infancia se encuentran muy rezagadas respecto de lo que cabría esperar de un país con nuestro nivel de desarrollo".

Plantear además que "son muchas las falencias en nuestras políticas, pero quizás ninguna es tan visible para la sociedad como la situación del Sename (Servicio Nacional de Menores). Los déficits de esta institución son enor-

Académicos, investigadores, ex ministros y actores del mundo social advierten que es necesario intervenir el Sename, pero que el problema es más profundo y global.

mes. Por nombrar algunos: faltan especialistas para diagnosticar y atender los severos problemas emocionales que podrían ser tratados exitosamente con el adecuado cuidado; las subvenciones para niños con discapacidades son insuficientes; las listas de espera para niños que requieren atención urgente, por ejemplo que han sufrido abuso sexual, pueden prolongarse por tres meses".

Diez de los firmantes fueron convocados por este diario para que profundizaran en su análisis sobre el tema. Así, Mario Waissblith (creador de Educación 2020), Benito Baranda (director de América Solidaria), Harald Beyer (ex ministro de Educación y director del Centro de Estudios Públicos), Mariana Aylwin (ex ministra de Educación y directora de la Corporación Apepre),

Cristián Larroulet (ex ministro de la Sepres y director del Instituto de Emprendimiento de la UDD), José Andrés Murillo (presidente de la Fundación para la Convivencia), Pablo González (director académico del Centro de Sistemas Públicos, U. de Chile), Marcela Marzolo (directora de la Fundación Oportunidad), más Paula Bedregal (jefa del depto. de salud pública, de la Facultad de Medicina UC) y Felipe Berrios (sacerdote jesuita) —quienes participaron de manera remota— plantearon las necesidades más urgentes que la sociedad chilena y los distintos gobiernos deben asumir para buscar solución a esta crisis.

"En varias áreas Chile necesita pensar en una estrategia de largo plazo para resolver sus problemas, pero quizás en ninguna esta mirada sea tan necesaria

como en la primera infancia. Lamentablemente, porque hay que construir de a poco y los resultados no son inmediatos, la construcción de esta estrategia y la urgencia de las políticas necesarias para llevarla adelante se pierden en la coyuntura", afirma Harald Beyer.

Benito Baranda advierte que "la situación de los niños y jóvenes más excluidos y que viven en pobreza en nuestro país se ha deteriorado desde hace unas dos décadas en particular la de aquellos que están fuera del sistema educacional, que han tenido dificultades graves de desarrollo y conflictos en sus familias".

"Habría que hacer algo ante la indiferencia"

Mientras que Mario Waissblith dice "decidimos que había

que hacer algo ante la indiferencia de sucesivos gobiernos". Y agrega: "Aquí hay violaciones sistemáticas y de larga data a los derechos humanos de infantes y adolescentes, que van desde condiciones inhumanas de hacinamiento en centros Sename, a abusos físicos y sexuales, a nulidad de las garantías de reinserción, a un sistema de justicia de familia totalmente sobrepasado para abordar el problema".

Pablo González señala que "la carta surge de la siguiente preocupación: hacer un cambio sustantivo que actualice las instituciones y las políticas a los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por Chile en 1990. Se requiere consenso técnico, político y ciudadano mayor a lo que se ha logrado hasta ahora".

En ese sentido, Mariana Aylwin advierte que "hay problemas de inversión y de gestión. Las políticas de infancia no están articuladas. Se han hecho esfuerzos, como el proyecto Chile Crece Contigo o la creación de un Consejo Nacional de la Infancia. Se presentó un proyecto para crear una Subsecretaría de la Niñez y una ley de Garantía de los Derechos de los niños. No obstante, se ha debilitado el interés político en los problemas de la infancia y adolescencia. No es una prioridad en la agenda pública".

En tanto, José Andrés Murillo señala que "el problema es cómo el Estado se hace cargo de la infancia. Yo espero que esto sea desde la perspectiva de los derechos humanos y no como un problema solo de protección social".

Felipe Berrios concluye que es clave "colocar a la infancia como una prioridad en nuestra convivencia como sociedad".

Crisis del Sename: Piden intervención, profesionales de excelencia y acelerar proyecto para separar atención de niños vulnerables y menores infractores

Si hay algo en lo que todos los participantes del debate coinciden, es en que no basta solucionar la crisis del Servicio Nacional de Menores —altamente cuestionado tras la muerte de Lisette, niño de 11 años— para abordar a una solución respecto de los problemas de la infancia en Chile. Sería un error —dicen— creer que eso basta. "El problema no es el Sename solamente. El Sename es un síntoma, no el problema en sí. El problema es cómo el Estado se hace cargo de la infancia", acota Murillo.

A la hora de analizar este servicio, sin embargo, señalan que se requiere tomar medidas con premura.

"Es preciso una intervención inmediata del Sename, el concurso de sus directores con criterios de Alta Dirección Pública, aunque todavía no haya una ley que lo obligue, y una evaluación independiente y divulgada ampliamente de las brechas de gestión y recursos financieros de todo el sistema de protección a la infancia", afirma Waissblith. En la misma línea, Berrios señala que se necesita "una intervención

externa a la institución hecha por una comisión transversal de peritos en que sus conclusiones sean vinculantes y que se cuente con los recursos apropiados para aplicar las conclusiones".

Para Beyer, la reforma de esta institución "pasa por asegurar que los niños y adolescentes que llegan a ella reciban la atención de equipos de excelencia y profesionales de alto nivel, que tengan la capacidad de reinserción de vuelta en sus hogares lo antes posible: a en familias de acogida cuando el hogar no es una alternativa". González también insiste en que en lo inmediato se necesita "que se cambien las condiciones en que viven los niños, para lo que se requiere de altos estándares y de una fiscalización y recursos adecuados".

En materia legislativa, Mariana Aylwin afirma que debe acelerarse el proyecto de ley que separa "las funciones de protección de derechos de niños vulnerables y de adolescentes en conflicto con la justicia, problema que aún no ha sido resuelto adecuadamen-

te, a pesar de estar largamente en debate". De hecho, la Presidenta Bachelet anunció el pasado 21 de mayo que se rediseñará el Sename.

Waissblith y Murillo advierten que esa separación puede que no implique necesariamente soluciones. "La separación del Sename no me huele. Ya es un sistema disintegrado, y lo vamos a disintegrar aún más para que no haya ninguna autoridad (a cargo)" dice el creador de Educación 2020.

Para Paula Bedregal, en consonancia con Marcela Marzolo, lo que ocurre en el Sename es "la punta del iceberg. Hay que repensar el sistema. El componente preventivo no funciona, el de rehabilitación es insuficiente y durante el Consejo Presidencial de Infancia (2009) se hicieron propuestas en esta línea, pero no prosperaron". Marcela Marzolo concluye que esa institución existe "porque estamos haciendo las cosas mal en términos de prevención y promoción. Hay se necesita una institución que acce a los niños que no pueden vivir con sus familias".

"Buscamos deliberadamente esta transversalidad"

"Al invitar a los 43 cofirmantes de la carta que se publica, buscamos deliberadamente esta transversalidad, para que no se prestara a interpretaciones de malibros políticas de corto plazo. Se necesita una política de Estado, no de gobierno", advierte Waissblith.

Agrega que ya se han juntado más de 4.000 firmantes (en la página www.prioridadinfancia.cl), "muchos de ellos especialistas, religiosos, periodistas, parlamentarios, ex ministros de varios gobiernos, y nos da gusto que esté presente desde el Partido Comunista hasta la UDI". Baranda le explica así: "Nos fuimos convocando poco a poco producto del dolor que nos provoca esta situación, algunos con mayor preocupación inicial por un conocimiento más profundo de lo que está sucediendo (y de las tramitaciones legales en el Parlamento), y otros desde nuestra preocupación —que habíamos manifestado ya públicamente— acerca de la ausencia de una política social maciza al respecto".

Saben, sin embargo, que este es solo un inicio. Beyer lo discibe: "Los firmantes dimos apenas el primer paso. Nuestra responsabilidad ahora es seguir insistiendo que los responsables de las decisiones públicas se hagan cargo de llevar adelante la agenda a la que invitamos y promover políticas intencionales para esos efectos".

Paula Bedregal aporta que "el tema infancia siempre ha sido de interés transversal desde la época de la lucha contra la desnutrición y la diarrea, la pobreza infantil y las iniciativas de agenda de lauche a comienzos del siglo XX". Tenemos una historia de interés público en la infancia que va más allá de un gobierno y de una orientación política. Hay que reactivar este espíritu".

Críticas a la falta de recursos: "Se invierte más en educación superior que en primera infancia", "preocupa la manera ineficiente en que se gasta"

Todos coinciden: falta invertir más recursos en la primera infancia.

"Es increíble que estemos discutiendo la gravedad de la educación superior, y no estemos trabajando con la misma fuerza en materia de primera infancia", afirma Paula Bedregal. "La evidencia científica es contundente (saludamos lo que tiene efectos positivos): es dándole más que invertir de preferencia: cuidado y educación inicial de calidad, entornos saludables, planificación local con la infancia en el centro. Enfocándose en los niños y niñas se trabaja con toda la familia. La inversión en primera

infancia, en sistemas mixtos (buena salud, buen apoyo social, buen contexto y buena educación), como retorno social no solo mejor desempeño educacional a mediano plazo, sino mejores efectos sociales (menor delincuencia, entre otros)", agrega.

En la misma línea, Mariana Aylwin complementa: "El país está invirtiendo más en educación superior que en educación inicial. Ni el sistema de educación escolar tienen capacidades para atender oportuna y adecuadamente a niños en situación de riesgo o vulnerados en sus derechos".

Benito Baranda también critica la falta de recursos

destinados a la protección de los niños: "Es irrisoria la inversión social que se realiza en ellos, y preocupante la manera ineficiente en que se gasta, dada la no actualización legal, administrativa, programática y metodológica que experimentamos en este ámbito en nuestro país".

"Para mejorar lo que hoy tenemos se necesitan más recursos, pero también una manera adecuada de invertirlos. Hay que formar a las personas que están a cargo de los niños, buscar experiencias exitosas y adaptarlas a nuestro contexto", dice Marcela Marzolo.

Piden adecuar la legislación a la Convención de los Derechos del Niño

Uno de los puntos claves del mensaje que envió el nuevo referente es que se debe actualizar la legislación chilena en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que fue ratificada por Chile en 1990.

Actualmente, el proyecto de ley de Garantías de Derechos de Niños y Adolescentes envió al Ejecutivo, busca ese objetivo, pero la iniciativa está todavía en primer trámite constitucional. Según Pablo González, "existe la necesidad de adecuar la institucionalidad y todas las políticas de infancia a

la Convención, que es un mínimo ético. La Convención no es solo un instrumento normativo, como la declaración de los derechos humanos, sino que también fija los estándares mínimos para que un niño pueda desarrollarse al máximo de su potencial y de manera digna".

José Andrés Murillo dice que es fundamental que el proyecto de ley de garantía de derechos se apruebe pronto.

"Pero que esta ley implique protección integral, no atomización de servicios a la infancia y adolescencia. Que implique recursos suficientes para ga-

rantizar estos derechos".

Mariana Aylwin recuerda su experiencia como parlamentaria y da cuenta del rezago que existe: "Cuando yo estaba en la Cámara (del 94 al 98) se discutió mucho el tema de una legislación adecuada a la Convención. Una de las cosas importantes era separar la protección de los niños vulnerables de los niños infractores en conflicto con la justicia. No puedo creer que hayan pasado todos estos años y que este tema no esté resuelto".

"Yo hablo —interviene Cristián La-

roulet— desde la frustración porque cuando trabajaba en Libertad y Desarrollo nos tocó muchas veces promover políticas y acciones respecto de esto. Yo fui ministro de la Sepres y hay una ley recomendada por todo el mundo, lo que decía Mariana, esto de la separación (de organismos para tratar a niños cuyos derechos han sido vulnerados de los adolescentes infractores de ley y su rehabilitación). Fue largamente estudiada la iniciativa, y a pesar de las urgencias, no avanzó".

Por otro lado, Paula Bedregal agrega que "urge mejorar la gestión y calidad de lo que se está haciendo en Chile Crece Contigo. Se ha hecho lo que se ha podido, pero falta, un ejemplo es la inestabilidad de las personas que trabajan en sus programas".

"Hay que tomar conciencia de que muchos de los problemas sociales que vive Chile tiene su origen en la infancia y es ahí donde debemos apuntar nuestros mejores esfuerzos sobre todo en la infancia más vulnerable", apunta Felipe Berrios.